

Id Cendoj: 35016340012001100256  
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social  
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 569/1999  
Nº de Resolución: 80/2001  
Procedimiento: SOCIAL  
Ponente: ANTONIO DORESTE ARMAS  
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIB.SUPERIOR JUSTICIA SALA SOCIAL

LAS PALMAS

**SENTENCIA: 00080/2001**

ROLLO Nº RSU 569/1999

40125

G.

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

En LAS PALMAS a Treinta de Enero de dos mil uno.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Ilmos. Sres D. HUMBERTO GUADALUPE HERNANDEZ Presidente DÑA. MARIA JESUS GARCIA HERNANDEZ Y D. ANTONIO DORESTE ARMAS Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY la siguiente

En el recurso de suplicación interpuesto por INSS contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de fecha diez de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en los autos de juicio nº 1074/97 en proceso sobre PRESTACIONES, y entablado por DÑA. Montserrat contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. /ña. ANTONIO DORESTE ARMAS, quien expresa el criterio de la Sala.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente: 1º.- Que la actora nacida el día 2 de Febrero de 1.938 con D.N.I. NUM000 , se encuentra afiliada al Régimen General de la Seguridad Social, como consecuencia de servicios prestados como empaquetadora tomate. 2º.- El actor inició proceso de enfermedad común recibiendo el alta médica en fecha 7 de agosto de 1.997. 3º.- Inició la vía administrativa ante la Dirección Provincial del. I.N.S.S., que en fecha 4 de septiembre de 1.997 declaró que el actor no se encontraba afecto de invalidez permanente en ningún grado. Y agotó la vía administrativa ante el I.N.S.S., que por resolución de fecha 12 de noviembre de 1.997, confirmó tal declaración. 4º.- La base reguladora asciende para la total a 64.088 pesetas. 5º.- Que la parte actora, padece cervicoartrosis moderada; espondiloartrosis lumbar moderada-severa; lumboaciática bilateral: síndrome del tunel carpiano bilateral; síndrome femoro-patelar bilateral; síndrome de **fibromialgia** , Síndrome depresivo insuficiencia venosa periférica. 6º.- Que tales lesiones en el actor las siguientes secuelas: dolor generalizado, síndrome cervico-cefálico, náuseas, mareos

y sensación vertiginosa, dolor lumbar y limitación a la movilidad, parestesias en dedos y pérdidas de fuerza de ambas manos, limitación para transportar objetos pesados, marcha prolongada, bipedestación y genuflexión prolongada y subir y bajar escaleras.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando interpuesta por DÑA. Montserrat frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre PRESTACION, debo declarar y declaro que la parte actora, se encuentra en situación de INVALIDEZ PERMANENTE EN GRADO DE TOTAL CUALIFICADA, con origen en enfermedad común, y en consecuencia condeno a la Entidad demandada a que le reconozca y abone una pensión vitalicia y mensual en cuantía del 75% de su Base reguladora más los efectos legales correspondientes, y con efectos desde el día 7 de agosto de 1.997.

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que no fue impugnado.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Sentencia de instancia reconoce la prestación de Invalidez Permanente Total para su profesión habitual de empaquetadora de productos agrícolas (tomates) solicitada por la demandante, contra la que se alza la representación letrada del INSS interponiendo el presente recurso de suplicación.

Su primer motivo se fundamenta en el apartado b del art. 191 de la Ley Procedimiento Laboral, solicitando la modificación del relato fáctico para adecuarlo a su pretensión revisoria.

El motivo no reúne todos los requisitos que señala la Ley (arts. 191 y 194 de la LPL) y que han sido precisados por la jurisprudencia (STS 29-9-94) como: señalamiento preciso del hecho omitido o tildado de erróneo, soporte documental o pericial, propuesta de texto alternativo, evidencia del error judicial sin necesidad de conjeturas o hipótesis y, por último, relevancia revisoria a efectos del signo del Fallo, pues resulta estéril rectificar o añadir datos fácticos si, a la postre, resulta confirmada la orientación del fallo de la presente Sentencia (STS 7-10-82); concretamente, no reúne el cuarto de ellos, pues resulta que los documentos citados no evidencian error del juzgador de manera patente, que ha valorado también otros informes médicos aportados por la parte actora, por todo lo cual el relato debe quedar inalterado.

Al efecto, consigue recordar que el Juzgador razona su preferencia por el dictamen privado por su carácter de pericia prestada en el acto del juicio a su presencia y sujeta a contradicción, frente a la prueba documental, aunque sea de carácter público, del informe del INSS. Es posible que éste refleje la realidad de las dolencias y secuelas de la actora (lumborartrosis y dolores leves en las piernas, que no producen limitaciones orgánico-funcionales significativas) y que, por tanto, sean exageradas es la que expone el Informe del médico privado, pero -se insiste- es la inmediatez y contradicción de la pericia presentada en el juicio la que ha hecho que el Juzgador se decante por la pericia privada y sobre ello, la Sala no puede alterar su convicción fáctica porque no hay evidencia, sin conjeturas o hipótesis, de su posible error.

Así, decae el motivo.

SEGUNDO.- El segundo motivo, de censura jurídica, se plantea con correcto amparo procesal en el apartado e del art. 191 LPL, señalando como infringido el art. 137 de la Ley General de la Seguridad Social, precepto capital que diseña el régimen legal de la invalidez en diversos grados.

Pues bien, del relato fáctico, tal como lo ha dejado la presente Sentencia cabe deducir que la demandante, empaquetadora de tomates, de 62 años de edad, tiene secuelas con proyección laboral suficiente como para ser acreedora del grado concedido, sobre todo porque su profesión le exige (hecho notorio) estar casi permanentemente toda la jornada de pie, clasificando y empaquetando fruta en una cinta transportadora.

Concretamente destaca que las secuelas que se quedan son: dolor generalizado, síndrome cervico-cefálico, náuseas, mareos y sensación vertiginosa, dolor lumbar y limitación a la movilidad, parestesias en dedos y pérdidas de fuerza de ambas manos, limitación para transportar objetos pesados, marcha prolongada, bipedestación y genuflexión prolongada y subir y bajar escaleras.

La Sala entiende que incluso rebajándolas por su posible exageración esas secuelas proyectadas sobre la capacidad laboral de la beneficiaria, le impiden realizar sus tareas, esencialmente manuales.

Por ello, el motivo y, con él el recurso, deben ser desestimados y con ello, queda confirmada la Sentencia recurrida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinentes aplicación.

## **FALLAMOS**

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la Sentencia de fecha diez de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho, del Juzgado de lo Social 3 de esta provincia, y en consecuencia confirmamos la misma.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

### **ADVERTENCIAS LEGALES.-**

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BBV cta número: 3537/000066 n° de recurso y año a nombre de ésta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 50.000 pts en la entidad de crédito B.B.V. c/c 2410000066 N° proc y año, clave 4043, Oficina Génova n° 17 de Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo. Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACION.-** Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.